

BOLIVIA

Bolivia es una democracia constitucional, multipartidista con una población de aproximadamente 9.7 millones de habitantes. En diciembre de 2009 en un proceso considerado libre e imparcial por observadores internacionales, los ciudadanos reeligieron como presidente a Evo Morales Ayma, líder del partido Movimiento al Socialismo (MAS). Las fuerzas de seguridad rinden cuentas a las autoridades civiles.

Los principales problemas de derechos humanos reportados fueron muertes y tortura por parte de fuerzas de seguridad, severas condiciones carcelarias, acusaciones de arrestos y detenciones arbitrarias, un poder judicial ineficaz, sobrecargado de trabajo y corrupto, medios de comunicación "parcialmente libres", corrupción y falta de transparencia en el gobierno, trata y tráfico de personas, trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción y severas condiciones de trabajo en el sector minero.

RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1 Respeto a la integridad de la persona, incluyendo estar libre de:

- a. Privación arbitraria o ilegal de la vida

El gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato por motivos políticos, sin embargo, en mayo, la policía dio muerte a dos jóvenes durante protestas violentas y en julio un hombre fue muerto mientras estaba bajo custodia policial.

El 8 de mayo, oficiales de la Policía Boliviana Nacional (PBN) mataron a dos jóvenes, Fidel Jiménez y Mario Hernani, durante un conflicto en la ciudad de Caranavi, departamento de La Paz. Informes del Defensor del Pueblo dependiente del gobierno, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la independiente Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia llegaron a la conclusión de que las muertes fueron resultado del uso excesivo de la fuerza; sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del parlamento llegó a la conclusión de que el gobierno había respondido adecuadamente.

El 6 de julio, el residente de El Alto David Olorio Apaza fue torturado y muerto mientras estaba bajo custodia de la PBN. La policía lo detuvo bajo sospecha de participar en el robo a un puesto de cobro de peaje. De acuerdo con el informe del Defensor del Pueblo dependiente del gobierno, el coronel Israel Vega de la PBN ordenó que Olorio fuera sacado de su celda para ser interrogado, momento en el que presuntamente fue torturado y asesinado. La autopsia reveló que la causa de su muerte fue asfixia por compresión del cuello y pecho. La investigación de la fiscalía sobre las acciones de Vega y de los funcionarios de la PBN teniente Omar Antezana, sargento Juan de la Cruz y los oficiales Juan Villa y Luis Aquino Mamani, estaba en curso a finales del año. Según informes de prensa y un informe del Defensor del Pueblo, el fiscal a cargo de la investigación recibió amenazas en torno al caso y los miembros del Poder Judicial que trabajaban en el caso llevaban chalecos antibalas en la audiencia de septiembre como resultado de amenazas. El informe del Defensor del Pueblo afirmó que el fiscal debía investigar la participación de policías en niveles superiores a los que fueron a juicio e incluyó un recurso contra la fiscal Verónica Angulo Viscarra sobre quien el Defensor del Pueblo alegó que hizo declaraciones falsas al público durante la audiencia inicial.

Aunque el fiscal ha continuado la investigación sobre las muertes de tres presuntos terroristas en Santa Cruz en 2009, no ha habido avances sobre el uso de la fuerza por parte de la policía durante este hecho.

La violencia colectiva, a veces se caracterizada por los autores como "justicia indígena" o "justicia comunitaria", condujo a algunas muertes violentas. Aunque la Constitución aborda el concepto de "justicia indígena", el gobierno rechazó la interpretación que permite la violencia colectiva, señalando que la Constitución prohíbe explícitamente la pena de muerte. Muchos observadores atribuyeron esa "justicia comunitaria" a la falta de una presencia policial y judicial efectiva en muchas zonas urbanas y rurales. Se cometieron asesinatos en nombre de la justicia comunitaria durante el año. Si bien no existen estadísticas oficiales de esos delitos, los medios de comunicación informaron sobre unos 15 casos de justicia comunitaria que dieron lugar a una o más muertes. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los linchamientos aumentaron, especialmente en El Alto y Santa Cruz.

El 23 de mayo, miembros de la comunidad capturaron, presuntamente torturaron y ejecutaron a cuatro oficiales de policía en la localidad de Uncía, Potosí. Los agentes de policía, Nelson Alcocer Casano, Rubén Cruz Aruquipa, Esteban Alave Arias y Miguel Ramos Palluni, formaban parte de la Dirección Nacional de

Prevención y Robo de Vehículos de la PNB. Miembros de la comunidad alegaron que los policías tenían antecedentes de obtener sobornos y matar a quienes no podían pagar. Las autoridades gubernamentales y las familias de los policías asesinados no recuperaron los cuerpos hasta después de dos semanas de negociaciones con los miembros de la comunidad. El Defensor del Pueblo dependiente del gobierno criticó la lenta reacción del gobierno ante los asesinatos y la falta de voluntad para ordenar a la policía entrar en la comunidad por la fuerza. La policía arrestó y detuvo a los miembros de la comunidad Filomena Muruchi, Juan Coyo Rojas, Ángel Coyo Aro, Eloy Janayo Choque, Anacleto Mendoza Aro, e Hilarión Escapa Gallego. Escapa Gallego fue el único acusado que se declaró no culpable y pidió a la terminación de su detención, que le fue denegada en una audiencia realizada el 5 de noviembre. La investigación estaba en curso a final del año.

El 15 de septiembre, miembros de la comunidad de Tapacarí, Cochabamba, enterraron vivos a tres hermanos, Basilio, Sabino e Ignacio Flores. De acuerdo con una investigación en curso a cargo del comandante de la Policía de Cochabamba Hernán Trujillo, los hermanos fueron asesinados después de un conflicto limítrofe entre varias comunidades campesinas que había dejado el saldo de un campesino muerto.

El 11 de septiembre, los testigos comenzaron a testificar en la investigación en curso acerca de las muertes de 13 personas en las ciudades de Porvenir y Cobija en Pando, ocurridas en 2008. Una declaración de Amnistía Internacional del 19 de junio instó a que el poder judicial procediera con este caso. El 12 de octubre, dentro del plazo de 18 meses previsto para la investigación, los fiscales presentaron cargos formales contra el ex prefecto (gobernador) Leopoldo Fernández y otros acusados por su presunta participación en el conflicto de 2008 en Pando. Fernández se siguió guardando detención en espera de la finalización del juicio. Durante las sesiones del tribunal, el abogado de Fernández indicó que el debido proceso legal fue violado. No hubo otros avances a finales del año.

No hubo avances en la investigación del fiscal acerca de las muertes de dos mineros durante un enfrentamiento con la policía en Cahuasi, cerca de la frontera de los departamentos de Oruro y Cochabamba acaecidas en 2008, o en la petición del año 2008 de la Corte Suprema de autorizar un juicio político contra miembros del Ministerio de Gobierno, entre ellos el ex ministro de Gobierno Alfredo Rada, implicados en los asesinatos de tres personas en Sucre el año 2007, presuntamente a manos de fuerzas de seguridad.

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos.

El 17 de febrero, después de un desacuerdo de nueve meses, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas General Ramiro de la Fuente negó a un investigador civil acceso a los archivos que presuntamente contenían información sobre aproximadamente 150 personas "desaparecidas" durante el período de la dictadura militar en el país. El ministro de defensa había asegurado previamente a la opinión pública que el investigador tendría acceso libre a los archivos. No hubo nuevos avances a finales de año.

c. Tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o denigrantes

La Constitución y las leyes prohíben tales prácticas, sin embargo, hubo varios informes de tortura por parte de fuerzas de seguridad.

El 16 de marzo, seis agentes de policía, integrantes del Grupo Especial Táctico de Investigaciones de Delitos Especiales en Cochabamba, presuntamente torturaron al ciudadano colombiano Mauricio Escobar Suárez quien fue detenido bajo sospecha de participación en tráfico de armas y robo. La víctima afirmó que fue torturado mediante descargas eléctricas y asfixia que dio lugar a lo que la víctima afirma fue tortura física y mental. La oficina del Defensor del Pueblo y la Fiscalía solicitaron que se abriera una investigación en contra de los policías que participaron en la detención de la víctima. Sin embargo, el fiscal asignado al caso rechazó la denuncia de tortura diciendo que no había bases para sustentar la acusación. La Oficina de Responsabilidad Profesional de Cochabamba inició procesos disciplinarios, pero hasta finales de año no hubo información actualizada sobre algún proceso penal.

El 17 de abril, Justo Romero Limón, empleado de una tienda de pesca y caza en Santa Cruz, denunció que había sido retenido y torturado durante cuatro horas por personas que dijo eran miembros de la Policía Boliviana Nacional (PBN) que investigaban un caso de tráfico de armas. Afirmó que los agentes de la PBN lo cubrieron con una bolsa de plástico y lo golpearon mientras le preguntaban dónde se encontraban las armas. La PBN se negó a aceptar sus quejas formales varios días después del incidente.

El 6 de julio, agentes de la PBN presuntamente torturaron a David Olorio Apaza antes de ser asesinado en El Alto de acuerdo con un informe del Defensor del Pueblo (ver sección 1.a.).

No hubo avances y no se esperaba ninguno en torno a las denuncias de abusos durante la detención, en abril de 2009, de Mario Tadic y Elod Toaso en relación con presuntas actividades terroristas o en torno a la denuncia de tortura presentada por Jhenieffer Wissemberg en mayo de 2009.

El 25 de septiembre, la televisión nacional difundió cintas de vídeo del año 2009 que muestran instructores militares golpeando a reclutas y al parecer sometiéndolos al denominado "submarino", específicamente al conscripto Guido Alvaro López Cortez de Oruro. El presidente Morales declaró que las denuncias de tortura eran muy graves y señaló que los autores comparecerían ante la justicia. El Defensor del Pueblo confirmó que esas acciones constituían tortura. Los militares acusados fueron suspendidos, pero a pesar de las promesas del gobierno en sentido de prestar cooperación, los fiscales del caso criticaron la falta de respuesta por parte de los militares. La investigación continuaba al finalizar el año.

Fueron informados dos incidentes de violencia callejera no letal. El 3 de agosto, turbas atacaron al gobernador de Potosí Félix González con piedras durante un bloqueo y huelga de 19 días. En la misma protesta, turbas atacaron la casa del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales César Navarro antes de ser dispersados por la policía. Durante la semana del 27 de diciembre se informó de violencia callejera en La Paz y El Alto en respuesta al decreto del gobierno emitido el 26 de diciembre para eliminar subsidios a la gasolina. Las protestas terminaron cuando el gobierno derogó el decreto el 31 de diciembre.

A raíz de la invasión de su casa por una turba en 2009, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas inició procesos penales contra Alfredo Huañapaco, Cruz Alarcón, Beatriz Quispe y Gonzalo Aduviri por no devolver su casa y propiedad. El juez de la causa aún no ha dado permiso a Cárdenas para regresar a su casa y el juicio estaba en curso a finales de año.

En mayo de 2009, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), afín al MAS, anunció que había aplicado "justicia comunitaria" al Director de Desarrollo Indígena del Departamento del Beni, Marcial Fabricano, azotándolo 50 veces en público. El dirigente de la CIDOB Adolfo Chávez dijo que Fabricano fue castigado por no nombrar dirigentes del MAS en cargos importantes en el Beni. Fabricano abrió un caso contra los líderes de la CIDOB y el gobierno

condenó el ataque y comenzó una investigación formal. No se anunciaron resultados a finales de año.

Condiciones en las prisiones y centros de detención

Las condiciones de reclusión fueron severas. Las cárceles están superpobladas y en malas condiciones. Las autoridades gubernamentales controlaron eficazmente sólo el perímetro externo de seguridad de cada prisión. Los prisioneros generalmente mantuvieron el control y bandas dirigieron actividades delictivas desde sus celdas.

La violencia entre los presos y en algunos casos la participación de funcionarios de las prisiones en actos de violencia contra los presos, constituyeron un problema.

El 25 de noviembre, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz, el preso Angel Fernando Mantilla Apaza, quien había sido declarado reo "peligroso" por el entonces Director de la cárcel de Chonchocoro Hernán Ramírez Méndez, asesinó a Junco Alberto Cáceres, de nacionalidad peruana, con varios disparos. Según sus familiares, Cáceres fue asesinado porque había amenazado con revelar supuestos vínculos entre la policía y los ladrones en el caso Olorio Apaza (véase la sección 1.a.). La investigación realizada por la oficina del Defensor del Pueblo reveló que las cárceles no habían transferido a los presos peligrosos, incluyendo Mantilla Apaza, como habían declarado que lo harían, poniendo las vidas de los demás reclusos, incluyendo Ramírez Méndez, en peligro. Se inició una investigación sobre el papel del sistema penitenciario en la muerte de Ramírez Méndez y aquella continuaba a finales de año.

La corrupción constituyó un problema entre los guardias de bajo rango y funcionarios de prisiones mal remunerados. El hacinamiento y las malas condiciones en los centros de detención siguen siendo un problema. La condición económica de un recluso a menudo determinó el tamaño de la celda, privilegios de visitas, elegibilidad para salidas en el día y la ubicación o la duración de su encierro. Los presos presuntamente pagaron montos a los ocupantes anteriores de celdas o a reclusos que controlaban bloques de celdas.

La dieta estándar de las cárceles no fue suficiente y los presos que pudieron permitirse hacerlo la complementaron comprando alimentos.

La ley dispone que los reclusos tengan acceso a asistencia médica, pero la atención de salud fue inadecuada y fue difícil que los reclusos obtuvieran permiso para recibir tratamiento médico externo. Organizaciones no gubernamentales (ONG) y

reclusos denunciaron la existencia tuberculosis y VIH/SIDA en las cárceles. Sin embargo, los prisioneros con mayores recursos económicos pudieron obtener permisos de transferencia a prisiones más cómodas o incluso a instituciones privadas externas a la cárcel debido a razones “médicas”. Los reclusos que pudieron pagar tuvieron acceso a drogas y alcohol y algunas veces utilizaron niños para traficar drogas dentro de las cárceles. Hubo 8.300 reclusos en instalaciones diseñadas para albergar a 4.700 prisioneros. Hubo prisiones separadas para mujeres, excepto en el caso de la cárcel de Morros Blancos en Tarija, donde hombres y mujeres compartieron las instalaciones. Las condiciones de las reclusas fueron similares a las de los hombres; sin embargo, el hacinamiento en la cárcel de mujeres de San Sebastián en Cochabamba fue peor que en la mayoría de las cárceles para hombres.

Según funcionarios del Ministerio de Gobierno, 700 reos jóvenes sentenciados (de 16 a 21 años de edad) no fueron separados de los reclusos adultos en las cárceles. Según entrevistas, reclusos adultos algunas veces abusaron a los reos jóvenes. Programas de rehabilitación para delincuentes juveniles u otro tipo de prisioneros fueron escasos o inexistentes. Los detenidos en espera de la realización de sus juicios fueron encarcelados juntamente con los reos sentenciados.

Aunque la ley permite que niños hasta los 6 años de edad vivan con un padre o madre en reclusión, niños de hasta 12 años vivieron con sus padres encarcelados. (La ley también permite a los cónyuges vivir en la prisión.) Aproximadamente 1.400 niños y niñas vivieron con uno de sus padres en la cárcel, como una alternativa a quedar en el desamparo. Durante las vacaciones escolares la cantidad de menores que vivían con sus padres en las prisiones algunas veces se duplicó.

Los reclusos en las prisiones tuvieron un acceso razonable a recibir visitantes y se les permitió la observancia religiosa. Las autoridades permitieron a los reclusos presentar quejas periódicamente ante una comisión de jueces de distrito, quienes luego investigan; sin embargo, numerosas denuncias de abusos no se presentan porque los internos tienen temor a las represalias de las prisiones.

El gobierno generalmente permitió visitas a las prisiones por parte de observadores independientes de derechos humanos, jueces y representantes de los medios de comunicación y dichas visitas se efectuaron a lo largo del año.

d. Arresto o detención arbitraria

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitraria; sin embargo, hubo un caso en que las fuerzas de seguridad aprehendieron y retuvieron a una persona bajo circunstancias legalmente dudosas.

El 10 de marzo, la policía arrestó y detuvo temporalmente a Eduardo Paz, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, por supuesta conexión con el caso de terrorismo de 2009 en Santa Cruz. No hubo ningún mandamiento de apremio ni cargos formales en su contra, ni existió una orden judicial para que presentara declaraciones. No hubo avances posteriores en este caso.

Jorge Melgar Quete permaneció en una cárcel de La Paz en espera de juicio después de su arresto en el año 2008 por hacer un llamado público a "liquidar" al presidente Morales. La oposición sostiene que Melgar fue encarcelado por difundir un video del ministro de la presidencia Quintana en el que pide el "entierro político" del entonces prefecto de Pando Leopoldo Fernández.

Papel de la policía y del aparato de seguridad

La Policía Nacional tiene la responsabilidad principal por la seguridad interna, pero las fuerzas militares pueden ser convocadas para prestar ayuda en situaciones críticas. En 2010 la Policía Nacional puso en disciplina a sus oficiales emitiendo 826 sanciones administrativas y arrestó a 281 oficiales de policía, suspendiéndolos de sus responsabilidades. Algunas veces los fiscales se mostraron renuentes a enjuiciar a los oficiales de las fuerzas de seguridad por delitos presuntamente cometidos mientras estaban en el cumplimiento de su deber, en parte debido a que dependen de la Policía Técnica Judicial para llevar a cabo la investigación de sus propios oficiales. Organizaciones No Gubernamentales denunciaron que varias investigaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos por parte de militares se detuvieron o que avanzaron lentamente debido a una política administrativa que prohíbe a los militares hacer comentarios sobre sus actividades, política que puede ser revocada por jueces civiles.

Durante el año, el gobierno proporcionó capacitación en profundidad sobre derechos humanos a 3.129 oficiales de policía.

Procedimientos de arresto y tratamiento durante la detención

Generalmente, los arrestos fueron realizados abiertamente, pero hubo informes creíbles de arrestos y detenciones arbitrarias.

La ley establece el requisito de una orden de aprehensión y la policía debe informar al fiscal sobre un arresto en un lapso menor a ocho horas. La ley requiere que un detenido sea remitido a un juez dentro de 24 horas (excepto bajo la declaratoria de estado de sitio, en cuyo caso un detenido puede ser retenido por 48 horas), tiempo durante el cual el juez debe determinar si es apropiado continuar la detención previa al juicio o conceder la libertad bajo fianza y debe ordenar la liberación del detenido si el fiscal no presenta razones suficientes para el arresto. Informes fidedignos indicaron que en algunos casos los detenidos estuvieron privados de libertad por más de 24 horas sin una aprobación de la corte.

Más del 75 por ciento de los detenidos esperaban sus sentencias, pero las cortes proporcionaron libertad bajo fianza a algunos detenidos. Los jueces tienen la autoridad para ordenar la detención preventiva de un sospechoso cuando se considera que existe el riesgo de que huya. Si un imputado no es detenido, un juez puede ordenar restricciones importantes sobre su capacidad de movilizarse. Los detenidos en general tuvieron un rápido acceso a sus familias y se les permitió tener acceso a abogados, pero aproximadamente 70 por ciento de ellos no pudieron pagar los costos de un abogado defensor y los defensores públicos de oficio fueron escasos y estuvieron sobrecargados de trabajo.

La negación del acceso a la justicia debido a detenciones prolongadas siguió representando un problema. Aunque la ley establece que la fase preparatoria de un caso no puede durar más de 18 meses y que la fase del juicio no puede sobrepasar los tres años, algunos sospechosos guardaron detención preventiva por más tiempo que el establecido por los límites legales. Si el proceso investigativo no es completado en 18 meses, el detenido puede solicitar su liberación a ser determinada por un juez; sin embargo, la corrupción judicial, una escasez de defensores públicos, los inadecuados mecanismos para realizar el seguimiento de los casos y los complejos procedimientos penales mantuvieron a algunas personas encarceladas por más de 18 meses antes de su juicio.

Niños de 11 a 16 años de edad pueden ser detenidos indefinidamente en centros infantiles si se conoce o sospecha que cometieron algún crimen, o para su protección, por orden de una trabajadora social. No hay revisión judicial de dichas órdenes.

e. Negación de juicio público imparcial

La ley dispone la existencia de un poder judicial independiente, pero el poder judicial fue ampliamente considerado corrupto, sobrecargado y debilitado por las vacancias existentes en sus niveles más altos.

El 9 de junio, Amnistía Internacional caracterizó al sistema de justicia como acosado por "la cultura de impunidad imperante y la desconfianza generalizada en el sistema de justicia", mientras que un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la politización del proceso judicial.

La Constitución establece que los jueces de alto nivel de los tribunales deben ser elegidos por medio de elecciones nacionales. Sin embargo, una controvertida "ley corta" permitió al presidente Morales a nombrar a 18 jueces para llenar las vacantes en la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Los nombramientos continuarán vigentes hasta que se lleven a cabo las elecciones judiciales (previstas para abril o mayo de 2011). Los críticos afirmaron que la medida provisional ponía en peligro la independencia del poder judicial.

La Corte Suprema también enfrentó una acumulación de más de 8.000 peticiones pendientes, algunas de ellas remontándose al año 2003. Según el ex presidente de la Corte Suprema Julio Ortiz, durante el año la corte dirimió 1.600 casos. La Corte Suprema tuvo solamente un cargo vacante en comparación con el año 2009 cuando cinco de los doce puestos estaban vacantes.

El presidente Morales también llenó todas las vacantes en el Tribunal Constitucional, que no había funcionado durante casi un año.

El Consejo de la Judicatura, una institución de supervisión creada para combatir la corrupción y la mala práctica judicial tuvo una acumulación de más de 100 casos disciplinarios. El sistema de justicia militar generalmente fue susceptible a la influencia de niveles jerárquicos y tendió a evitar que se dictaran fallos que hubieran afectado el honor de las Fuerzas Armadas. Cuando un militar es acusado por un delito cometido en ejercicio de sus funciones militares, el comandante de la unidad afectada designa a un oficial para llevar a cabo una investigación y para preparar un informe. Los resultados son remitidos a un asesor jurídico, generalmente en nivel de división, quien recomienda se emita el fallo de inocencia o de culpabilidad. En casos de infracciones graves, el caso es remitido a un tribunal

militar, excepto en casos en que personal militar debe ser juzgado en cortes civiles por violaciones contra los derechos humanos.

Procedimientos de juicio

Los imputados tienen derechos constitucionales a la presunción de inocencia, a un juicio rápido y público por jurado, a permanecer en silencio, a tener un abogado, a confrontar a los testigos, a presentar pruebas a su favor, al debido proceso legal, a la apelación y a confrontar las acusaciones judiciales con los fiscales gubernamentales antes que sea iniciado un proceso formal ante los tribunales.

En la práctica, los derechos a tener un abogado y a un juicio rápido no fueron protegidos de manera sistemática. Según la Oficina de Defensa Pública, su personal para los nueve departamentos del país incluyó solamente 55 defensores públicos y 11 asistentes jurídicos. Un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en diciembre de 2009, indicó que sólo el 55 por ciento de los municipios tenía jueces, 23 por ciento tenía investigadores gubernamentales y 3 por ciento tenía defensores de oficio.

La ley dispone un sistema de juicios orales transparentes en los juicios penales, establece el requisito de que ningún período de detención previa al juicio exceda los 18 meses sin acusaciones, dispone un período máximo de detención de 24 meses en casos en que una sentencia esté siendo apelada y ordena que la duración máxima de un proceso sea de tres años. La ley establece que el fiscal está a cargo de la fase de investigación de un caso y que debe dar a los sospechosos una oportunidad para confrontar las acusaciones antes que comience formalmente el juicio. Sin embargo, la ley fue aplicada con desigualdad y hubo demoras en su aplicación.

El fiscal instruye a la policía sobre qué declaraciones de testigos y evidencia se precisan para llevar adelante el proceso. El fiscal procesa casos por delitos de acción privada (con sentencias posibles menores a cuatro años de privación de libertad) ante un juez de instrucción y casos por delitos mayores (con sentencias posibles de más de cuatro años) ante tribunales de sentencia. Los tribunales de sentencia constan de un panel de cinco miembros que incluye tres jueces ciudadanos y dos jueces colegiados.

Prisioneros y detenidos políticos

A diferencia del año pasado, no hubo informes de prisioneros o detenidos políticos. En 2009, la oposición denunció que el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y otros tres individuos fueron detenidos como prisioneros políticos, mientras que el gobierno sostuvo que fueron detenidos legalmente en virtud de orden judicial (ver sección 1.d.) El gobierno permitió a Fernández recibir visitas, incluyendo monitores internacionales, pero no dejó que la prensa entrara en la cárcel para entrevistar a Fernández como parte de su campaña para las elecciones nacionales. Este caso está siendo monitoreado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país.

Procedimientos y reparaciones judiciales civiles

Hay un sistema judicial independiente e imparcial para materias civiles. La ley dispone reparaciones penales para violaciones de derechos humanos y a la conclusión de un juicio penal, el agraviado puede iniciar un juicio civil para exigir reparaciones. Administrativamente, el Defensor del Pueblo puede emitir resoluciones sobre casos específicos de derechos humanos, las cuales el gobierno puede hacer cumplir.

f. Interferencia arbitraria en la privacidad, familia, hogar o correspondencia

La ley prohíbe tales acciones y el gobierno generalmente respetó esas prohibiciones.

En relación con la muerte violenta de dos jóvenes en el departamento de La Paz el 8 de mayo, las autoridades allanaron dos veces las casas de los abogados de las víctimas, Jorge Quiroz y Claudia Lecona, después que presentaron una demanda contra el comandante de la Policía Nacional Oscar Nina y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Según el informe del Defensor del Pueblo, estos ataques fueron violaciones de los derechos humanos de los abogados. La investigación continuaba al finalizar el año.

Sección 2 Respeto a las libertades civiles, incluyendo:

a. Libertad de expresión y prensa

La ley reconoce la libertad de expresión y de prensa. Aunque el gobierno generalmente respetó estos derechos, mantuvo una relación antagónica con la prensa. En un ejemplo, el 25 de noviembre, el presidente Morales dijo en respuesta a la pregunta de un periodista, "la mejor oposición es de la mayoría de los

periodistas, ¿quién niega eso? ¿Ustedes pueden negar eso? La mejor oposición en realidad son los medios de comunicación, los dueños de los medios y cómo los usan a los amigos periodistas". Miembros de la oposición acusaron al Presidente Morales y funcionarios de gobierno por hacer declaraciones despectivas en relación a la prensa, politizando el contenido producido por los medios de comunicación del Estado y por adoptar medidas destinadas a restringir a los medios independientes o fomentar la autocensura.

Hubo múltiples medios de comunicación independientes, incluyendo medios impresos, televisión y radio y continuó la difusión de varios puntos de vista, muchos de ellos expresando oposición al gobierno. Las emisoras de radio y televisión generalmente funcionaron libremente. Sin embargo, en áreas rurales la radiodifusión estatal fue a menudo el único medio disponible.

La ley dispone que las personas halladas culpables de insultar, difamar o calumniar a funcionarios públicos por cumplir sus deberes pueden ser encarceladas por un tiempo que varía entre un mes a dos años. Los insultos dirigidos contra el Presidente, el Vicepresidente o un Ministro, incrementan la pena en una mitad adicional. Los periodistas acusados de haber violado la Constitución o los derechos de los ciudadanos, son remitidos al Tribunal de Imprenta, un cuerpo independiente de 40 miembros autorizado para evaluar las prácticas periodísticas y aplicar sanciones.

En su *Informe sobre la Libertad de Prensa 2010*, la ONG Freedom House caracterizó a la prensa del país como "parcialmente libre". Freedom House informó que: "continuaron deterioros significativos en el país" a medida que los ataques y la retórica oficialista contra los medios se incrementaron.

El 8 de octubre, el presidente Morales promulgó la "Ley contra el racismo y toda forma de discriminación". Al tiempo que expresaron su apoyo a los principios generales de la ley, periodistas, grupos de medios de comunicación y la Iglesia Católica criticaron dos artículos específicos que sancionarían a los medios de comunicación por difundir o publicar contenido racista o discriminatorio. Los medios de comunicación organizaron protestas numerosas y recolectaron firmas pidiendo que los artículos en cuestión fueran eliminados. Alegaron que las sanciones podrían aplicarse de forma selectiva para restringir la libertad de prensa. Al abordar el debate sobre la ley, al Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay, dijo durante una visita a Bolivia en noviembre de 2010 que " la ley internacional requiere que las limitaciones (a la libertad de

expresión) sean estipuladas por ley, que sean definidas de forma clara y precisa, y que sean implementadas por un ente independiente".

El 20 de septiembre, las oficinas de Radio Virtual 94.7 fueron destrozadas por un incendio que consumió buena parte de su oficina y equipo. La policía siguió investigando este caso y la causa del incendio todavía no se había determinado a finales del año.

En marzo de 2009, el gobierno inició un juicio por difamación al prominente diario *La Prensa* debido a la publicación de un reportaje que relacionaba al presidente Morales y al ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana con un plan para trasladar contrabando transportado en 33 camiones hacia Brasil. Los editores de *La Prensa* rechazaron la demanda y dijeron que consideraban el juicio como un intento de silenciar a la prensa. El caso no se había resuelto a finales de año.

Según datos del Observatorio Nacional de Medios de la ONG local UNIR, hubo 59 casos reportados de agresiones (ataques verbales y físicos así como amenazas) que afectaron a 107 periodistas.

Además de preocuparse por la ley antirracismo, las organizaciones de medios de comunicación expresaron su preocupación sobre otras leyes que según sus argumentos restringirían la libertad de prensa. Denunciaron que la nueva Ley del Régimen Electoral prohíbe a los medios referirse, de cualquier manera, a los candidatos que se presentan a las elecciones para la Corte Suprema y para el Tribunal Constitucional.

Libertad de Internet

No hubo restricciones gubernamentales al acceso a Internet o informes de que el gobierno monitoreaba la comunicación por correo electrónico o los foros de conversación en Internet. Individuos y grupos pudieron participar en la expresión pacífica de sus opiniones a través del Internet, incluyendo a través del correo electrónico. La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que en 2009 había 10 usuarios de Internet por cada 100 habitantes.

Libertad académica y de acontecimientos culturales

No hubo restricciones gubernamentales en contra de la libertad académica o actividades culturales.

b. Libertad de reunión y asociación pacífica

Libertad de reunión

La ley dispone la libertad de realizar reuniones pacíficas y las autoridades generalmente respetaron este derecho en la práctica. Aunque la ley exige un permiso para la mayoría de las manifestaciones, las fuerzas de seguridad raramente aplicaron la ley y la mayoría de los manifestantes llevaron adelante sus protestas sin obtener permisos, bloqueando frecuentemente las principales avenidas y carreteras.

Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, en ocasiones los manifestantes portaron armas, incluyendo palos, machetes, armas de fuego y dinamita. Las fuerzas de seguridad (la policía y en ocasiones los militares) fueron llamadas frecuentemente para dispersar grupos de manifestantes que portaban armas o que amenazaban instalaciones gubernamentales y privadas.

Libertad de Asociación

La ley dispone la libertad de asociación y el gobierno en general respetó este derecho en la práctica.

c. Libertad de Culto

Para una descripción completa de la libertad de culto, por favor ver el *Informe Sobre Libertad de Culto Internacional 2010* en www.state.gov/g/drl/irf/rpt/.

d. Libertad de movimiento dentro del país, personas desplazadas internamente, protección de refugiados y apátridas

La ley reconoce la libertad de movimiento dentro del país, el viaje al extranjero, la emigración y la repatriación y el gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica. Sin embargo, a lo largo del año, manifestantes progubernamentales y de la oposición impidieron el movimiento dentro del país al bloquear las carreteras principales, como también lo hicieron grupos sindicales y laborales.

La ley prohíbe el exilio forzoso de ciudadanos y el gobierno no lo empleó en la práctica.

Protección de refugiados

Las leyes disponen la otorgación de estatus de asilado o refugiado y el gobierno ha establecido un sistema para proporcionar protección a los refugiados. En la práctica el gobierno proporcionó alguna protección contra la expulsión o la devolución de refugiados a países donde sus vidas o su libertad podrían verse amenazadas debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o por sus opiniones políticas.

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas de interés. ACNUR informó que la población de refugiados reconocidos en el país era 737 personas, en comparación con 673 personas en 2009. El gobierno terminó los procesos y acordó proporcionar protección de refugiado en 28 casos y negó la condición de refugiado en 13 casos. Hubo 46 nuevas solicitudes durante el año.

Varios cientos de miles de ciudadanos carecieron de los documentos básicos de identidad, lo que les impidió obtener documentos para viajes internacionales y el acceso a otros servicios gubernamentales. Algunos expertos estimaron que el número de ciudadanos que carecían de documentos había disminuido debido a los esfuerzos del gobierno.

Sección 3 Respeto a los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno

La ley reconoce a los ciudadanos el derecho de cambiar a su gobierno pacíficamente y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones periódicas, libres e imparciales llevadas a cabo según los principios del sufragio universal. Muchos ciudadanos en edad de votar, especialmente en áreas rurales, carecieron de los documentos de identidad necesarios para votar. Un amplio espectro de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas funcionaron libremente. Las elecciones para elegir a los principales cargos nacionales y a los gobiernos municipales están programadas para realizarse cada cinco años.

Elecciones y participación política

Grupos observadores, incluyendo el Centro Carter y la Unión Europea, proclamaron que las elecciones del 4 de abril para elegir gobernadores y autoridades municipales fueron pacíficas, libres e imparciales. Hubo algunas

denuncias de fraude en los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz que condujo a los tribunales electorales a invalidar algunos votos en las mesas de votación donde se confirmaron fraudes e irregularidades. Los electores inscritos en estas mesas fueron llamados a volver a emitir su voto el 18 de abril. El Presidente Morales y miembros del MAS denunciaron públicamente esos resultados electorales como empañados por el fraude e iniciaron procesos legales contra las cuatro cortes electorales departamentales.

Grupos observadores de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Centro Carter consideraron que las elecciones nacionales presidenciales y legislativas de diciembre de 2009 fueron pacíficas, libres e imparciales. La aplicación de un nuevo padrón electoral biométrico redujo en gran medida las acusaciones de fraude. No hubo informes importantes de violencia.

De cada dos candidatos en las listas para las elecciones municipales uno debe ser mujer, un requisito que amplió la representación femenina hasta aproximadamente 30 por ciento de los puestos de concejales municipales. Hubo 52 mujeres entre los 166 diputados y senadores en el Congreso y 10 mujeres en el gabinete de 18 miembros. Se estimó que la cantidad de miembros indígenas del Congreso alcanzó al 17 por ciento.

La constitución y la ley electoral apartaron siete distritos indígenas especiales para incrementar la participación política indígena en la Asamblea Plurinacional (Congreso). El Presidente Morales se considera indígena. Tres de los nueve gobernadores departamentales fueron indígenas.

Sección 4 Corrupción oficial y transparencia gubernamental

La ley establece sanciones penales para la corrupción de funcionarios oficiales; sin embargo, el gobierno no implementó la ley efectivamente y funcionarios en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno a menudo incurrieron en prácticas corruptas con impunidad. Las leyes para combatir la corrupción y promover la transparencia incluyen la Ley de Administración y Control Gubernamentales, el Estatuto del Funcionario Público y la Ley de Declaración Jurada de Bienes y Rentas. Un delegado presidencial a nivel de gabinete tiene la autoridad para investigar casos de corrupción en cualquier nivel y cualquier rama del gobierno.

De acuerdo con los indicadores de gobernabilidad mundial del Banco Mundial, la corrupción y la falta de transparencia gubernamentales fueron problemas graves y estaban empeorando.

La corrupción policial fue un problema importante, debido en parte a los bajos salarios y a la falta de formación, si bien no existieron estadísticas fiables para cuantificar la profundidad del problema.

En agosto, el tribunal penal de La Paz puso al ex viceministro del interior Gustavo Torrico bajo arresto domiciliario después que el ministro de la presidencia Oscar Coca anunciara que Torrico estaba involucrado en un caso de extorsión de ciudadanos menonitas en Santa Cruz. El ciudadano alemán Dirk Schmidt, quien ayudó a crear la red que tenía la intención de apoderarse del dinero, fue condenado a prisión por estar implicado en el caso.

En septiembre el ex presidente Jorge "Tuto" Quiroga, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por calumnia y difamación por las declaraciones que hizo en febrero de 2009 alegando corrupción en un banco. Quiroga afirma que la sentencia tiene motivaciones políticas y ha presentado una apelación.

No hubo avances en el caso del asesinato de un ejecutivo petrolero y robo de maletines ocurridos en enero de 2009 que se cree vinculado a un escándalo de corrupción en la empresa petrolera estatal.

No hubo avances en el caso de abril de 2009 con respecto a la compra de tierras para explotación minera en Santa Cruz. El caso se centró en denuncias de que funcionarios del gobierno obtuvieron ganancias ilegales de la venta.

Un mosaico de leyes requiere que los funcionarios públicos informen acerca de potenciales conflictos de interés personales y financieros. Los casos relacionados con acusaciones de corrupción contra funcionarios públicos requieren de la aprobación del Congreso antes que los fiscales puedan iniciar los procesos legales.

No hubo leyes que proporcionaran acceso a la información gubernamental.

Sección 5 Actitud del gobierno referente a la investigación internacional y no-gubernamental de presuntas violaciones a los derechos humanos.

Varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos en general llevaron a cabo sus actividades sin restricción gubernamental, investigando y publicando los resultados de sus hallazgos sobre casos relacionados con los derechos humanos. Los funcionarios de gobierno generalmente cooperaron y se interesaron en sus puntos de vista; sin embargo, las ONG y el Defensor del Pueblo se quejaron de que en ocasiones las fuerzas de seguridad y los ministerios del gobierno se negaron a cooperar con sus investigaciones.

El Defensor del Pueblo es un cargo de seis años establecido por la Constitución. El Congreso elige al Defensor del Pueblo a través de una votación que requiere dos tercios de votos. El Defensor del Pueblo está a cargo de supervisar la defensa y promoción de los derechos humanos, específicamente para defender a los ciudadanos de abusos por parte del gobierno. El Defensor del Pueblo trabajó sin influencias de partidos y con los recursos adecuados provenientes del gobierno y ONG extranjeras. El Defensor del Pueblo publicó informes anuales y el gobierno generalmente aceptó sus recomendaciones. En mayo el Congreso nombró a Rolando Villena Villegas como el nuevo Defensor del Pueblo. Luego Villena nombró nueve defensores del pueblo departamentales. La Cámara Baja del Congreso tiene una comisión permanente de derechos humanos que propone leyes y políticas para promover los derechos humanos. Los diputados que integran la comisión cumplen períodos de un año.

En agosto y septiembre, Villena publicó informes criticando el papel del gobierno en la muerte de dos jóvenes en Caranavi y en lo que se informó como tortura y muerte de David Olorio Apaza (véase la sección 1.a.). Villena también publicó un informe de fin de año, que era crítico del Gobierno de Bolivia y de la celeridad del proceso judicial.

A raíz de la muerte violenta de tres presuntos terroristas internacionales en abril de 2009 en Santa Cruz (ver sección 1.a.), el Presidente Morales inicialmente rechazó llamados de los gobiernos de Hungría, Irlanda y Croacia para realizar una investigación internacional, pero posteriormente autorizó a la policía cooperar con investigadores de los tres países. Una investigación del gobierno irlandés llegó a la conclusión de que la autopsia de uno de los presuntos terroristas, Michael Dwyer, estaba incompleta. No hubo nuevos avances a finales de año.

Sección 6 Discriminación, abusos sociales y trata y tráfico de personas

La constitución prohíbe explícitamente la discriminación en razón de raza, género, idioma, orientación sexual, o estatus social. Según el defensor del pueblo, hubo discriminación notable contra (en orden descendente) personas con VIH/SIDA, los indígenas, homosexuales y mujeres.

Mujeres

El delito de violación fue un problema serio pero no denunciado adecuadamente. La ley define dos tipos de casos penales. El Código de Procedimiento Penal caracteriza a la violación como un delito público. La ley criminaliza el estupro, con penas de 15 a 20 años de prisión por la violación de una persona menor de 14 años. En casos que involucran relaciones sexuales consentidas con un adolescente de 14 a 18 años de edad, la pena es de dos a seis años de cárcel. La violación forzada de una persona adulta es sancionada con sentencias que van de cuatro a diez años de cárcel. Los crímenes sexuales contra menores son automáticamente considerados crímenes públicos. La violación por parte del cónyuge no se considera un crimen.

La violencia contra las mujeres fue también un problema persistente y no denunciado adecuadamente. Según la ONG Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), el 70 por ciento de las mujeres sufrieron algún tipo de abuso. El CIDEM señaló que las estadísticas “no reflejan la magnitud real del problema de la violencia contra la mujer” y que “una gran cantidad de mujeres” no denunciaron la agresión que sufrían de manera diaria.

Las leyes de familia que prohíben la violencia psicológica, física y sexual establecen multas o sanciones de hasta 4 días de arresto, a menos que el caso se convierta en un crimen público sujeto al Código Penal; sin embargo, estas leyes se cumplieron de manera irregular. El gobierno tomó pocos pasos significativos o concretos para combatir la violencia intrafamiliar.

Hasta noviembre, la Brigada de Protección a la Familia manejó 70.792 casos en todo el país. Sin embargo, la brigada policial careció de apoyo financiero, apoyo estructural y personal para hacer seguimiento y atender a todos los casos denunciados. La mayor parte de los casos de violencia intrafamiliar no fueron denunciados.

La ley considera al acoso sexual como delito civil. No hubo estadísticas sobre la incidencia de acoso sexual, pero en general se reconoce que este problema está ampliamente extendido.

Oficinas de servicios legales dedicadas a la familia y a los derechos de la mujer funcionaron en todo el país. El programa de seguro de salud materno infantil proporcionó servicios de salud a las mujeres en edad reproductiva y a los menores de cinco años de edad.

El gobierno reconoció el derecho básico de las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente la cantidad, espaciamiento y tiempo de nacimiento de sus hijos. Las clínicas de salud y ONG locales de salud pudieron funcionar libremente distribuyendo información sobre planificación familiar bajo la guía del Ministerio de Salud Pública. El gobierno hizo transferencias directas de dinero a madres embarazadas y madres que dieron a luz recientemente para fomentar el uso de los servicios básicos de salud pública que contribuyen a la reducción de la mortalidad materna e infantil. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2008, la tasa de mortalidad materna se estimó en 310 por 100.000 nacidos vivos y publicó que la tasa de prevalencia de anticonceptivos entre las mujeres fue de 61 por ciento; sin embargo, sólo el 37 por ciento de las mujeres que usan anticonceptivos utilizan métodos modernos.

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2008 informó que 90 y 71 por ciento de las mujeres recibieron servicios de cuidado prenatal y de parto por personal capacitado, respectivamente. La encuesta publicó que el 85 por ciento de las mujeres e infantes recibieron atención de salud postnatal. La mejora en estos indicadores es explicable por la política del Ministerio de Salud consistente en proporcionar dinero en efectivo en forma de bonos a las mujeres que se inscriben en un centro de salud y regresan para sus visitas prenatales, parto y cuidados postparto.

Las mujeres tienen los mismos derechos legales que los hombres; sin embargo, muchas mujeres no tuvieron conocimiento de sus derechos legales. En general, las mujeres no gozaron de la misma condición social que los hombres. Los prejuicios tradicionales y las condiciones sociales continuaron siendo un obstáculo para su desarrollo. En áreas rurales, las costumbres tradicionales que restringen el derecho de la mujer a recibir tierras como herencia continuaron siendo un problema. La ley del salario mínimo trata a hombres y mujeres en forma igualitaria; no obstante, las mujeres generalmente ganaron menos que los hombres por realizar un trabajo igual. En ocasiones las mujeres se quejaron de que los empleadores fueron renuentes a contratarlas debido a los costos adicionales (principalmente el de maternidad) en el paquete de beneficios laborales para las mujeres. La brecha de género en la contratación pareció darse en mayor escala en los segmentos con educación superior. La mayoría de las mujeres en las áreas urbanas trabajó en la economía informal y en los sectores de servicios y comercio, incluyendo en el

servicio doméstico y en microempresas, mientras que en áreas rurales, la mayoría de las mujeres económicamente activas trabajó en la agricultura. A menudo las jóvenes abandonaron tempranamente la escuela para trabajar en el hogar o en la economía informal.

Muchos grupos nacionales e internacionales dedicados a la defensa de los derechos de la mujer trabajaron para promover los derechos de las mujeres y para integrarlas al núcleo principal de la sociedad.

Niñez

La ciudadanía se obtiene por medio del nacimiento dentro del territorio del país (a menos que ocurra bajo el estatus de un cargo diplomático) y por medio de un padre boliviano o ambos. Los certificados de nacimiento se registraron por medio del pronunciamiento de un notario acerca del certificado o a través del testimonio de dos adultos con respecto a los padres del menor. Fueron necesarios certificados de nacimiento registrados para obtener cédulas de identidad nacional.

El castigo corporal y el abuso verbal fueron comportamientos comunes en las escuelas. Los niños de 11 a 16 años pueden ser detenidos indefinidamente en centros para menores por presuntos delitos o para velar por su propia protección, por medio de una orden expedida por una trabajadora social. También hubo muchos niños viviendo en las calles de las ciudades principales. El Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) estimó en 2007 que más de 3.700 niños y adolescentes vivían en las calles de las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Sucre. La prostitución infantil fue un problema, particularmente en áreas urbanas y en la región del Chapare. Hubo reportes sobre la existencia de trata y tráfico de niños hacia países limítrofes para someterlos a trabajo en condiciones de explotación. Según la Pastoral de Movilidad Humana, en 2008, cada mes entre nueve y once niños en la región sur del país desaparecieron y presumiblemente fueron víctimas de trata y tráfico. Varias ONG tuvieron programas activos para combatir la prostitución infantil.

Hubo 194 oficinas de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para proteger los derechos y los intereses de los niños en todo el país. El plan del gobierno para combatir el trabajo infantil incluyó una campaña de información pública contra la prostitución infantil y allanamientos a prostíbulos.

El país no es parte en el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Para obtener información sobre la

sustracción internacional de menores por los padres, por favor, consulte el informe anual del Departamento de Estado sobre la convención en http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport_4308.html.

Antisemitismo

No hubo informes de actos antisemitas. La comunidad judía consistió en aproximadamente 650 personas.

Trata y tráfico de personas

Para obtener información sobre trata y tráfico de personas, por favor consulte el Informe *Anual sobre Trata y Tráfico de Personas* del Departamento de Estado en www.state.gov/g/tip.

Personas discapacitadas

La ley prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidades e identifica los derechos y beneficios otorgados a ellas. No hubo discriminación oficial contra las personas con discapacidades en el trabajo, educación, acceso a la atención de salud o la provisión de otros servicios estatales. No obstante, el gobierno no hizo cumplir con eficacia estas disposiciones y la discriminación de la sociedad contra las personas discapacitadas mantuvo a muchas de ellas en sus hogares desde temprana edad, restringiendo su integración a la sociedad. La Ley del Discapacitado prevé la existencia de accesos para sillas de ruedas en todos los edificios públicos y privados, establece la importación libre de impuestos de artefactos ortopédicos, reduce en un 50 por ciento el costo del transporte público y amplía la enseñanza del lenguaje de señas y del sistema Braille.

La Comisión Nacional del Discapacitado fue responsable de proteger los derechos de las personas con discapacidades.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

En octubre el gobierno promulgó una nueva Ley de Lucha contra el Racismo por lo que es ilegal discriminar o usar lenguaje racista (ver sección 2.a.). Esta ley incluye penas de hasta 360 días de suspensión de medios de comunicación por usar lenguaje presuntamente racista. También incluye un mandato para que todos los tipos de medios de comunicación presenten programación o literatura contra el

racismo en sus programas y publicaciones. Hubo discriminación de la sociedad y de tipo sistémico contra la pequeña minoría afro-boliviana, que generalmente permanece en el segmento más bajo de la escala socioeconómica y enfrenta graves desventajas en cuanto a salud, esperanza de vida al nacer, educación, ingresos, alfabetización y empleo. La mayor parte de los 35.000 afro-bolivianos que se estima existen vive en la región de los Yungas en el Departamento de La Paz.

Personas indígenas

En el censo del 2001, aproximadamente el 62 por ciento de la población mayor a los 15 años de edad se identificó como indígena, principalmente de los grupos quechua y aymara. La CIDH informó que aproximadamente 70 por ciento de esas personas indígenas vivían en la pobreza o en la extrema pobreza, con poco acceso a la educación o a servicios mínimos para sustentar la salud humana, como agua potable limpia y sistemas sanitarios. El gobierno emprendió un amplio programa para incrementar el acceso al agua potable y al saneamiento en áreas rurales donde predominan las personas indígenas.

Las tierras indígenas no están completamente demarcadas y la reforma de la posesión de tierras permanece como un asunto político central. Históricamente, una mayoría de las personas indígenas compartían las tierras colectivamente bajo el sistema del “ayllu”, un sistema que no fue legalmente reconocido durante la transición a las leyes de propiedad privada. A pesar de las leyes que ordenaban la redistribución y titulación de tierras, el reconocimiento y la demarcación de las tierras indígenas no se han logrado plenamente. Los indígenas protestaron por la explotación externa de sus recursos y en ocasiones se quejaron de que las autoridades no consultaron apropiadamente con ellos. La ley establece que los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer el control de los recursos naturales en sus territorios.

Campesinos indígenas ocuparon varias propiedades privadas, a menudo con el respaldo del Movimiento Sin Tierra. Desde 2007, al menos ocho incautaciones ilegales de minas por parte de campesinos han sido denunciadas. En agosto, campesinos tomaron minas en Potosí durante el bloqueo y huelga que duró 19 días en la región. El 16 de agosto, el gobierno se reunió con los líderes de la huelga y accedió a varias de sus peticiones, entre ellas: una comisión para hacer frente a una disputa fronteriza con el vecino departamento de Oruro; una comisión para estudiar el uso y la preservación del Cerro Rico en la ciudad de Potosí; una declaración para la construcción de un aeropuerto internacional; compromisos para construir fábricas de cemento; mayor control del Estado sobre la fundición de Karachipampa

tras la conclusión del arbitraje con la empresa Atlas Precious Metals Company. A finales del año no hubo mayores avances.

Las personas indígenas continuaron teniendo una representación proporcional baja en el gobierno y en la política y los grupos indígenas soportaron una carga desproporcionada de pobreza y desempleo. Los servicios educativos y de salud del gobierno no estuvieron disponibles para muchos grupos indígenas que viven en áreas remotas. El gobierno continuó tratando de mejorar la situación individual y familiar con la entrega de montos mensuales condicionales (el dinero se otorga si las personas cumplen una condición) y pagos de rentas por jubilación a personas de bajos ingresos y a los ancianos. Por ejemplo, bajo el programa de transferencias condicionales de efectivo las mujeres embarazadas y niños menores de dos años reciben dinero si asisten a sus controles médicos (como un intento de disminuir la mortalidad infantil).

Abusos, discriminación y actos de violencia sociales en razón de orientación sexual e identidad de género

La ley prohíbe la discriminación en razón de orientación sexual, incluyendo discriminación por parte de la policía y los ciudadanos tienen permitido cambiar su nombre y género en sus cédulas de identidad oficiales. Sin embargo, la discriminación social contra personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero fue común y fue señalada en comentarios editoriales de medios de comunicación locales. Existieron organizaciones defensoras de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero y se realizaron marchas, incluyendo un pequeño desfile anual de orgullo homosexual, que recibió la aprobación gubernamental apropiada y protección policial. Un estudiante fue presuntamente expulsado de su escuela secundaria por ser homosexual, aunque las autoridades escolares negaron que esa haya sido la razón de su expulsión.

Otros tipos de violencia o discriminación social

El Defensor del Pueblo informó que las personas con VIH/SIDA enfrentaban una persistente discriminación. Hubo pocos, si alguno, actos de violencia contra personas con VIH/SIDA. No existieron programas gubernamentales formales para combatir la discriminación por el VIH/SIDA.

Sección 7 Derechos de los trabajadores

a. Derecho de asociación

La ley permite a los trabajadores formar sindicatos y afiliarse a ellos, incluyendo aquellos que trabajan en el sector público, con algunas excepciones. En la práctica este derecho fue limitado por reglamentos del gobierno y juzgados laborales ineficientes.

La ley requiere una autorización previa del gobierno para establecer un sindicato y confirmar a sus dirigentes elegidos, permite sólo un sindicato por empresa y permite al gobierno disolver los sindicatos mediante una resolución administrativa. La ley también impone restricciones en asuntos internos de los sindicatos. Por ejemplo, los miembros de los directorios de los sindicatos deben ser bolivianos de nacimiento y los inspectores de trabajo tienen permitido asistir a las reuniones del sindicato y monitorear las actividades sindicales.

Los trabajadores pueden organizar un sindicato en cualquier empresa privada de 20 trabajadores o más con el apoyo de por lo menos 50 por ciento de los trabajadores. El requisito de contar con un mínimo de 20 empleados constituyó una restricción severa, dado que se estima que 72 por ciento de las empresas tienen menos de 20 empleados. Aproximadamente el 25 por ciento de los trabajadores en la economía formal, que dio empleo a aproximadamente 30 por ciento de todos los trabajadores, son miembros de un sindicato. Los sindicatos bolivianos no pueden unirse a organizaciones internacionales.

La ley otorga a la mayoría de los trabajadores el derecho a la huelga pero requiere que los sindicatos primeramente acudan a la mediación del gobierno; la ley exige que los empleadores hagan lo mismo antes de iniciar un lockout. De acuerdo con la ley, una huelga legal requiere el apoyo de 75 por ciento de los trabajadores. Los trabajadores que participan en una huelga ilegal pueden ser condenados a penas de prisión de uno a cinco años.

El gobierno puede iniciar un arbitraje obligatorio para poner fin a una huelga o conflicto colectivo en los sectores no esenciales. Los empleados públicos de servicios, incluidos los de los bancos y los mercados públicos, tienen prohibido realizar huelgas, lo cual excede la definición de servicios esenciales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El gobierno puede iniciar un arbitraje obligatorio para poner fin a una huelga o conflicto colectivo en los sectores no esenciales. Los empleados públicos de

servicios, incluidos los de los bancos y los mercados públicos, tienen prohibido realizar huelgas, lo cual excede la definición de servicios esenciales de la OIT.

Los empleados del sector público (incluyendo maestros, transportistas, y trabajadores del sector de la salud) realizaron huelgas frecuentemente y no fueron sancionados por haber realizado dichas huelgas. Las huelgas generales y solidarias son ilegales, pero el gobierno no enjuició ni impuso sanciones en tales casos.

El gobierno central tuvo vínculos cercanos con ciertas organizaciones laborales que agrupan a otras, como la Central Obrera Bolivia y la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia. El gobierno ejerció presión sobre los dirigentes nacionales y entidades locales de algunas de estas organizaciones y financió entidades paralelas en áreas donde el gobierno tenía menos influencia.

b. Derecho a organizarse y negociar colectivamente

La ley otorga a los trabajadores el derecho a organizarse y realizar negociaciones colectivas; sin embargo, las negociaciones colectivas o las negociaciones voluntarias directas entre empleadores y trabajadores sin la participación del gobierno, fueron limitadas. La mayor parte de los acuerdos logrados por negociación colectiva se limitaron a temas salariales.

La ley prohíbe la discriminación contra los sindicatos y requiere la recontractación de los empleados despedidos ilegalmente por participar en actividades sindicales. La Corte Nacional del Trabajo atiende las denuncias de discriminación contra los sindicatos, pero puede tardar un año o más en emitir un fallo. La Corte falló a favor de trabajadores que habían sido despedidos en algunos casos y ordenó exitosamente su reincorporación. Sin embargo, dirigentes sindicales manifestaron que para cuando la corte emitía los fallos, los conflictos a menudo estaban resueltos o eran obsoletos.

No hay leyes especiales o exenciones de las leyes laborales normales en las zonas francas del país.

c. Prohibición del trabajo forzado u obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, incluyendo el trabajo infantil; sin embargo, continuaron las prácticas de emplear a los niños como aprendices y de la servidumbre agrícola de los trabajadores indígenas, al igual que algunos presuntos

casos individuales de trabajadoras del hogar a quienes sus empleadores mantuvieron prácticamente en cautiverio.

En muchos casos, familias guaraníes trabajaron tierras de propiedad de terratenientes a cambio de vivienda y comida pero no recibieron el salario mínimo. Como resultado, contrajeron grandes deudas con los terratenientes acreedores y no se les permitió abandonar la propiedad hasta pagar su deuda. Muchas de estas familias vivían en condiciones de mucha pobreza, sin agua, electricidad, atención médica o escuelas.

Algunos trabajadores, la mayoría indígenas, fueron forzados a trabajar cosechando castaña en el departamento de Beni. El trabajo era estacional, durando aproximadamente tres meses por año. Durante ese tiempo los terratenientes vendían alimentos esenciales a los trabajadores con sobreprecio; en consecuencia los trabajadores contrajeron grandes deudas y no se les permitió abandonar la propiedad hasta que la deuda fuera pagada. Condiciones similares existieron en las industrias del azúcar, ganadería, maíz y maní en el Departamento de Santa Cruz.

d. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

El trabajo infantil siguió constituyendo un serio problema. La ley prohíbe todo trabajo remunerado de menores de 14 años de edad; sin embargo, en la práctica, el Ministerio de Trabajo no hizo cumplir las leyes sobre el trabajo infantil, incluyendo aquellas disposiciones que se refieren a la edad mínima para trabajar y el máximo número de horas autorizado para niños trabajadores, los requisitos de que los niños completen su educación y acerca de las condiciones de salud y seguridad en sus puestos de trabajo. La ley prohíbe una serie de trabajos peligrosos, inmorales e insalubres para menores de 18 años. Las leyes laborales permiten el trabajo de niños entre 12 y 14 años como aprendices, bajo varias restricciones formales, cumplidas en forma muy deficiente, que han sido criticadas por la OIT y que fueron consideradas por algunos como equivalentes a la esclavitud.

El Ministerio de Trabajo es responsable de hacer cumplir las disposiciones sobre el trabajo infantil, pero las hizo cumplir de manera desigual en el país. Según la Organización Internacional del Trabajo, 848.000 niños entre las edades de cinco a diecisiete años trabajaban. Aproximadamente 800.000 niños son menores de 14 años de edad y están trabajando en condiciones laborales de riesgo, 354.000 en zonas urbanas y 446.000 en zonas rurales.

También hubo evidencia de explotación de niños indígenas en las regiones del Chaco, Beni y Santa Cruz y en las ciudades a lo largo del país dondequiera que hubo personas migrando desde el campo. Los niños en el área urbana vendieron mercancías, lustraron zapatos y trabajaron como asistentes de los proveedores de transporte público. Los niños del área rural frecuentemente trabajaron junto con sus padres desde una temprana edad, generalmente en la agricultura de subsistencia. Los niños en general no fueron empleados en fábricas o empresas formales, pero cuando lo fueron, a menudo trabajaron el mismo número de horas que los adultos. Los niños también trabajaron en minas de oro, plata, estaño y zinc, como también en otras ocupaciones peligrosas en el sector informal.

La prostitución infantil continuó siendo un problema. Según el Defensor del Pueblo, 3.000 niños viven en las calles, muchos de los cuales son explotados sexualmente. El informe indicó que más de 100.000 niños trabajaban de 8 a 12 horas por día. La Organización Internacional para las Migraciones estima que 2.000 niñas trabajaban, o fueron forzadas a trabajar, como prostitutas.

La costumbre tradicional del trabajo del “criadito” persistió en algunas partes del país. Los criaditos son niños indígenas de ambos sexos, en general de 10 a 12 años, entregados por sus padres a familias de clase media o alta por acuerdo, para que realicen labores en el hogar a cambio de educación, ropa, vivienda y alimentación. Dicho tipo de trabajo es ilegal, y no hubo controles sobre los beneficios o el tratamiento dado a estos niños.

Además, una cantidad importante de niños enfrentó situaciones de trabajo forzoso en la producción de caña de azúcar y castaña, así como en la minería, la agricultura y el servicio doméstico. Véase también el *Informe Anual del Departamento de Estado sobre Trata y Tráfico de Personas* en www.state.gov/g/tip.

El gobierno dedicó recursos limitados para investigar casos de trabajo infantil, pero las ONG y organizaciones internacionales tales como UNICEF, complementaron los esfuerzos del gobierno. El gobierno continuó sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil en sus peores formas, trabajando con organizaciones no gubernamentales para desalentar el uso del trabajo infantil en los sectores minero y azucarero, al participar en programas financiados internacionalmente para proporcionar alternativas educativas a los niños que de otra manera trabajarían en los campos de la minería o de la caña de azúcar. Sin embargo, de acuerdo con el Defensor del Pueblo, 3.800 niños trabajaban en la minería en 2009.

e. Condiciones aceptables de trabajo

Durante el año, el gobierno elevó el salario mínimo mensual en 5 por ciento hasta llegar a Bs.680 (\$us 97) para el sector público y privado, que en 2008 era de Bs.647 (\$us 92). El salario mínimo no proporcionó un nivel de vida decente para un trabajador y su familia. La mayoría de los trabajadores del sector privado ganaron más que el salario mínimo. Si bien el salario mínimo estuvo por debajo de los salarios predominantes en la mayoría de los empleos, ciertos cálculos de beneficios estuvieron incorporados a él. Muchos trabajadores independientes formaron parte de la economía informal y no recibieron el salario mínimo.

Las leyes laborales establecen una jornada semanal máxima de 48 horas, limitan la jornada de trabajo de las mujeres en una hora menos que la de los hombres, prohíben a las mujeres trabajar por la noche, ordenan que haya períodos de descanso y requieren el pago de una prima por trabajo realizado por encima de una semana de trabajo estándar. En la práctica el gobierno no hizo cumplir estas leyes.

La Oficina de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, pero las normas relevantes fueron cumplidas débilmente. Hubo menos de 37 inspectores a lo largo de todo el país. Aunque el gobierno no llevó estadísticas oficiales, hubo informes en sentido de que trabajadores murieron debido a condiciones inseguras de trabajo, particularmente en los sectores de la minería y la construcción. Una comisión nacional tripartita de representantes empresariales, laborales y gubernamentales fue responsable de monitorear y mejorar la seguridad ocupacional y las normas de salud. El Ministerio de Trabajo mantuvo una oficina para responder preguntas de los trabajadores y atender sus denuncias e informes sobre prácticas laborales injustas y condiciones peligrosas de trabajo.

Las condiciones laborales en las minas operadas por cooperativas continuaron siendo malas. Los mineros continuaron trabajando jornadas largas sin períodos de descanso programados en condiciones peligrosas, insalubres y ganaron relativamente poco por sus esfuerzos; algunos ganaron solamente Bs.7 (\$us 1) por hora. Las condiciones cambiaron poco en las últimas décadas, ya que las cooperativas de mineros independientes carecieron de recursos financieros y técnicos necesarios para mejorar la infraestructura de las minas. La ley otorga a los trabajadores el derecho a retirarse de situaciones peligrosas sin temor a perder sus empleos. Como la mayoría de los mineros en estas condiciones trabajan por su cuenta, dejan el trabajo de la mina cuando los precios son más bajos, a menudo para trabajar en el Chapare como productores de coca. Sin embargo, pocos tienen

habilidades que se pueden transferir a otros rubros. Más mineros vuelven a trabajar en las minas cuando los precios son altos y pueden ganar salarios más altos.